



Resolución del Consejo Nacional de la Magistratura

N° 123-2009-PCNM

Lima, 18 de mayo de 2009

VISTO:

El expediente de evaluación y ratificación del doctor Carlos Alberto Alarcón del Portal, Vocal de la Corte Superior de Justicia de Lima, con los expedientes acompañados sobre Procesos Disciplinarios seguidos ante este Consejo N° 019-2002-CNM y 075-1999-CNM; y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el magistrado Carlos Alberto Alarcón del Portal ingresó a la carrera judicial el 9 de mayo de 1994, fecha en la que juramentó en el cargo de Vocal de la Corte Superior de Justicia de Lima nombrado mediante Resolución del Jurado de Honor de la Magistratura N° 003-94 de 29 de abril del citado año; siendo el caso que habiendo sido comprendido dentro de un proceso de ratificación en el año 2002, el Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura decidió no ratificarlo en su cargo mediante Resolución N° 381-2002-CNM de 17 de julio de 2002.

SEGUNDO: Que, habiendo cuestionado su no ratificación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, suscribió un acuerdo de solución amistosa con el Estado Peruano, en virtud del cual se declaró nula la resolución en el extremo que no lo ratificó, rehabilitándose su título de nombramiento y disponiéndose su reincorporación en el cargo.

TERCERO: Que, en ejecución del citado acuerdo de solución amistosa, el Consejo Nacional de la Magistratura convocó al magistrado Carlos Alberto Alarcón del Portal a un nuevo proceso de evaluación y ratificación, comprendiéndolo en la Convocatoria N° 004-2008-CNM, el mismo que habiendo seguido el trámite correspondiente, mediante acuerdo de fecha 26 de setiembre de 2008 el Pleno del Consejo acordó no ratificar al citado magistrado, emitiéndose la Resolución N° 134-2008-PCNM de 26 de setiembre de 2008, decisión que impugnó mediante recurso extraordinario, el que fue declarado fundado en parte reponiéndose el proceso a la etapa correspondiente.

CUARTO: Que, reprogramadas las actividades y llevadas a cabo las etapas respectivas del proceso, incluida la entrevista personal pública realizada el 5 de mayo del 2009, corresponde resolver en definitiva el presente proceso, conforme a lo establecido en el artículo 32° del Reglamento de Evaluación y Ratificación de Jueces del Poder Judicial y Fiscales del Ministerio Público debiendo precisar que la decisión adoptada se fundamenta únicamente en hechos acreditados objetivamente en el expediente del proceso, en los expedientes acompañados a los que ha tenido acceso en todo momento el magistrado conforme consta de las diversas actas de lectura obrantes en autos; y asimismo se tiene en cuenta lo vertido por el magistrado en su entrevista personal.

QUINTO: Que, el proceso de evaluación y ratificación es un proceso distinto al disciplinario, tiene por finalidad evaluar la conducta e idoneidad observadas dentro del periodo de evaluación a fin de determinar si se justifica o no la permanencia de un magistrado en el servicio, conforme a lo establecido en el inciso 3 del artículo 146° de la Constitución Política del Perú; la decisión acerca de la continuidad o permanencia en el ejercicio del cargo exige que el magistrado

evidencie una conducta caracterizada por la verdad, lealtad, probidad, independencia, imparcialidad, diligencia, contracción al trabajo funcional, decoro y rectitud, además de una capacitación y actualización adecuadas, permanentes y constantes, como también el fiel respeto y observancia a la Constitución Política del Estado y a las leyes de la República, todo lo cual persigue asegurar un desempeño acorde a las exigencias ciudadanas. Aclarado ello corresponde adoptar la decisión final, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5º, inciso 7 del Código Procesal Constitucional, concordante con el artículo 27º y siguientes del Reglamento del Proceso de Evaluación y Ratificación de Jueces del Poder Judicial y Fiscales del Ministerio Público (Resolución número 1019 – 2005 – CNM y sus modificatorias), debiendo considerarse que el periodo de evaluación del magistrado evaluado se computa desde su ingreso a la carrera judicial, producido el 09 de mayo de 1994, hasta el 17 de julio de 2002, fecha en la que no fue ratificado, reiniciándose el cómputo a partir de su reingreso, ocurrido el 23 de noviembre de 2007, hasta la fecha de conclusión del presente proceso.

Rubro conducta:

SEXTO: Que, en relación al rubro conducta, de la información recibida de la Corte Suprema de Justicia de la República, Consejo de Defensa Judicial del Estado, Fiscalía Suprema de Control Interno del Ministerio Público, Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial y la obrante en los registros del Consejo Nacional de la Magistratura, que forman parte del expediente del proceso de Evaluación y Ratificación, se tiene que el magistrado:

- a) No registra antecedentes policiales, judiciales y penales;
- b) En calidad de demandado registra tres (03) procesos de Hábeas Corpus interpuestos en el marco de su labor jurisdiccional, los cuales se encuentran en trámite.
- c) Ante la Fiscalía Suprema de Control Interno registra diez (10) denuncias desestimadas en su contra al ser declaradas infundadas, improcedentes, declaradas no ha lugar y concluido-no ha lugar a abrir investigación preliminar.
- d) Asimismo registra cuatro (04) quejas, dos (02) de ellas formuladas por retardo en la administración de justicia y que fueron archivadas, una (01) por irregularidad funcional, archivada por improcedente y una (01) por infracción a sus deberes que ha sido archivada por no haber mérito a abrir investigación.

Obra también información referente a tres (03) Visitas Judiciales, todas ellas archivadas.

- e) En la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) registra siete (07) investigaciones, cuatro (04) por retardo en la administración de justicia en las que en 03 fue absuelto y 01 se encuentra en trámite; una (01) por cobros indebidos declarada prescrita; una (01) por inobservancia de normas procesales donde se propuso su destitución y fue finalmente archivada y una (01) por infracción a sus deberes que se encuentra en trámite.

De las siete investigaciones mencionadas destaca la registrada con el N° 44-97 abierta el 20 de abril del año 1997 y está referida a un confuso incidente en el que participó el evaluado siendo herido por disparo de arma de fuego, hechos que inclusive merecieron la atención de diversos medios periodísticos y hasta una investigación por parte de la OCMA que, sin embargo,



Resolución del Consejo Nacional de la Magistratura

culminó con su absolución; respecto de la cual el magistrado expresó versiones contradictorias en su entrevista.

f) Registra tres (03) medidas disciplinarias, dos (02) de apercibimiento, de las que fue rehabilitado en el 2008 y una multa del 10% de su remuneración mensual que le fue impuesta por una negligencia administrativa, rehabilitada en el año 2000, hechos que son también considerados en la presente, ya que se trata de hechos comprendidos dentro de su periodo de evaluación.

g) Ante el Consejo Nacional de la Magistratura registra dos (02) procesos disciplinarios iniciados ante pedidos de destitución por parte de la Corte Suprema de Justicia de la República, los mismos que fueron archivados, uno por haber prescrito la acción y otro por haberse dispuesto su archivamiento debido a que el magistrado había perdido su condición de tal luego de haber cesado en el cargo por no haber sido ratificado en aquella oportunidad. Los hechos que motivaron ambos procesos merecen una minuciosa y exhaustiva valoración, ya que tienen una relación directa con la conducta observada por el magistrado dentro del periodo materia de evaluación.

Investigación N° 174-2001-Lima.

La primera solicitud de destitución efectuada por el Poder Judicial deriva de la investigación N° 174-2001-Lima del 5 de setiembre de 2001, realizada por la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial (OCMA) declarada prescrita por el CNM al haber transcurrido el plazo legal para emitir pronunciamiento, por lo que no fue posible examinar el fondo del asunto; no obstante los hechos que la motivaron deben ser merituados en atención a que se encuentran dentro del periodo de evaluación y están vinculados a uno de los parámetros de evaluación, que es precisamente la conducta observada por el magistrado a lo largo de este periodo. Estos hechos se remontan a la queja verbal de fecha 16 de marzo del año 2001 formulada por el abogado Pedro Gamarra Jhonson de la Procuraduría Adhoc contra los vocales integrantes de la Sala Penal de Apelaciones para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, presidida en ese entonces por el doctor Carlos Alberto Alarcón del Portal atribuyéndosele una presunta inconducta consistente en la acelerada tramitación de una solicitud de variación de detención por comparecencia presentada por cuatro procesados a quienes dicha Sala concedió los beneficios en el lapso de 24 horas, sin dar tiempo a que el Procurador denunciante pudiera hacer uso de la palabra antes que la Sala resuelva, conforme se había solicitado. Se atribuyó a esa Sala actuar con inusual celeridad al resolver los citados incidentes, esto es, al día siguiente de elevados a la Sala, sosteniendo el magistrado en su defensa que actuaron conforme a Ley pues tenían un plazo de 24 horas para resolverlos y que en esos casos siempre resolvían dentro de dicho término y si no se le concedió el uso de la palabra al Procurador fue por que éste lo solicitó en forma extemporánea aunque es posible que la Sala en este caso, como en otros, haya actuado con celeridad procesal, llama la atención que esta actitud no sea consecuente con el hecho de haber devuelto los cuadernos conteniendo los incidentes recién los días 13, 14 y 16 de marzo, esto es después de seis, siete y nueve días de haber sido resueltos, circunstancia que desdibuja la celeridad con la que actuó inicialmente la Sala a cargo del evaluado, pues no se empleó la misma celeridad para devolver los actuados tanto más si se trataba de la libertad de los encausados, surgiendo entonces fundadas dudas con respecto a las razones que motivaron dicha demora o retención de actuados ya resueltos.

Sobre este tema el magistrado en su entrevista pública refirió que en ninguno de los incidentes fue ponente, que no tuvo conocimiento total de los mismos y que desconocía el retraso en la devolución de los incidentes, responsabilizando de ello a la Vocal Administrativa porque ella no le notificó ninguna irregularidad; argumentos que muestran el propósito de evadir la responsabilidad que tenía como Presidente de Sala y denota su desconocimiento acerca de lo que acontecía en su Sala así como la carencia de control en los casos que en ella se ventilaban; actuación negativa para un Presidente de Sala de quien los justiciables y la ciudadanía esperan una conducta diligente en el manejo del Despacho.

Investigación N° 0075-1999-Lima.

En lo concerniente a la segunda solicitud de destitución formulada por el Poder Judicial al CNM, fue como resultado de la Investigación 0075-1999- Huánuco - Pasco, del 17 de diciembre del 2001 seguida por la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) y que dio mérito al proceso disciplinario N° 019-2002-CNM seguido ante este Consejo, que finalmente fue archivado en noviembre de 2002 en razón que el doctor Alarcón del Portal, a esa fecha, ya no era magistrado por no haber sido ratificado el 17 de julio de 2002, sin pronunciamiento sobre el fondo del pedido; sin embargo al igual que en la investigación antes relatada, resulta pertinente referirse únicamente a los hechos con la finalidad de valorarlos conjuntamente con los demás aspectos materia de evaluación.

Se atribuyen al magistrado, entre otros, los siguientes hechos:

i) Se tiene que el doctor Alarcón del Portal, en su calidad de Presidente de la Corte Superior de Justicia de Huánuco-Pasco, dispuso la realización de una visita judicial al Juzgado Mixto y a los Juzgados de Paz Letrado de Huacaybamba, Unión-Dos de Mayo y Yarowilca, llevada a cabo entre el 21 al 27 de octubre de 1999, por una comitiva que estuvo compuesta por 8 servidores de dicha Corte, utilizando una vía carretera que resultó ser la más larga de las dos posibles, con el propósito de pasar por la ciudad de Lima para que el magistrado evaluado pueda supuestamente asistir a un compromiso de índole familiar, esto es la ceremonia de incorporación al Colegio de Abogados de Lima de su hija, lo que significó que se incurriera en mayor gasto de tiempo y recursos oficiales considerando el número de personas de las que estaba compuesta dicha comitiva.

En relación a estos hechos, el magistrado ha expresado, por escrito y en su entrevista personal, que la otra ruta, mas corta para llevar acabo la visita, desde Huánuco a Huaycabamba, era muy accidentada y sobre todo peligrosa por la presencia de terroristas en dicha zona, siendo esto último el principal motivo por el que se siguió la ruta más larga (aquella que significaba pasar por la ciudad de Lima) ya que resultaba la única ruta segura y fue la que recomendó la Administración de la Corte en coordinación con el Ministerio de Transportes; sin embargo estos argumentos no resultan consistentes debido al hecho admitido por el magistrado que en el retorno de dicha visita, se siguió esta vez, por la vía más corta, esto es el camino que afirmó resultaba ser el más peligroso e inseguro.

Asimismo cabe mencionar que el día 28 de octubre del referido año, una comisión de la OCMA realizó una visita a la ciudad de Yarowilca para efectuar una acción de control, tomando la ruta directa (la más corta) y no el camino más largo por la ciudad de Lima, lo cual desautoriza aún más los argumentos esgrimidos por el magistrado.



Resolución del Consejo Nacional de la Magistratura

A mayor abundamiento, se ha evidenciado que el magistrado no desconocía los lugares por donde debería realizarse el viaje, como adujo inicialmente, pues al 21 de octubre de 1999, registraba más de 1 año y 9 meses en el cargo de Presidente de la Corte Superior de Justicia de Huánuco-Pasco y visitó anteriormente esas mismas ciudades los días 10, 11 y 12 de febrero de 1998 conforme consta de la copia de la Resolución de Alcaldía N° 001-98-CPM de 11 de febrero de 1998 emitido por el Alcalde de la Municipalidad de Huaycabamba, presentada por el magistrado con su curriculum vitae que corre a fojas 409-410; además de ello el tiempo que ejerció el cargo de Presidente de esa Corte Superior al mes de octubre de 1999, resultaba suficiente para conocer su jurisdicción, debiendo considerarse que como máxima autoridad judicial tenía la obligación de conocer el lugar en el cual representaba al Estado frente a los justiciables y a la población de los Departamentos de Huánuco y Pasco, teniendo en cuenta que el ejercicio de la magistratura implica vocación de servicio, porque la administración de justicia es un fin y una de las principales funciones del Estado, así todos los jueces y fiscales se deben a la Nación, a las altas responsabilidades que se les encomienda y ello exige los más altos estándares éticos y de calidad profesional, ya que su función es una de las más nobles y demanda profunda vocación de servicio entre las diversas actividades humanas, y por ello, se procura la excelencia de su actuación. La ruta autorizada por el doctor Alarcón del Portal en su calidad de Presidente de la Corte en mención, así como el número de personal que asignó para las visitas judiciales efectuadas, ocasionó gastos innecesarios al Poder Judicial y por ende al Estado, evidenciándose que se proyectó una visita judicial priorizando fines particulares y no institucionales cuando pudo utilizarse la vía directa, ahorrando costos y evitando gastos así como el desgaste humano y de los bienes del Estado, utilizando indebidamente la oportunidad para asistir a un evento personal, lo cual es a todas luces inaceptable, sobre todo si se trata del máximo representante del Poder Judicial en su respectivo Distrito Judicial de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1) del artículo 90° de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

ii) En relación a los continuos cambios de magistrados en la Corte Superior que presidía, el doctor Alarcón del Portal sostuvo que se realizaron por una serie de motivos y que no habría dispuesto cinco cambios en un mismo lugar sino en diferentes lugares. Acerca del cambio de la doctora Laura Gallegos indicó que se realizó por disposición de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, pues se dispuso que el Quinto Juzgado pase a Lauricocha, por eso la derivó de Huánuco a dicho lugar y que, posteriormente, por razones de salud dispuso su traslado a Tingo María y después, nuevamente, la trasladó a la ciudad de Huánuco, todo lo cual refleja negligencia del magistrado haciendo inaceptable el cambio constante de magistrados sin justificación válida debido a que ello genera inestabilidad en la administración de justicia, lo que repercute de modo negativo en las funciones de dicha Institución, así como en la imagen proyectada a la sociedad, además de vulnerar la obligación de todo Presidente de una Corte Superior relacionada con la cautela de una pronta administración de justicia, de conformidad con lo establecido en el numeral 4) del artículo 90° de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Asimismo en cuanto al cambio de una Juez de Tingo María sostiene el evaluado que **"se trataba de una Juez Suplente que cobraba coimas ..."** agregando que **"la alimentista, -refiriéndose a una de las partes en un proceso judicial- fue y le dijo que le estaban cobrando, que la señora no quiso denunciar ni nada ..."**, sosteniendo además de modo sorprendente que bastó el dicho de la denunciante para que cambiara a la Juez, hecho delicado que tiene una trascendencia única al disponer que el cambio de un magistrado se realice por el simple dicho de una justiciable, sin una investigación previa ni corroborar los hechos con los medios probatorios pertinentes, lo que vulnera todo procedimiento legal y los derechos fundamentales de la

persona y de las partes, reflejando un acto arbitrario que vulnera el principio constitucional que otorga el derecho de defensa, el debido proceso, lo cual desmerece la labor del magistrado por el tiempo que se desempeñó como Presidente de la Corte Superior de Justicia de Huánuco-Cerro de Pasco.

iii) Sobre el uso irregular de la camioneta que le fue asignada para servicio oficial, la que fue empleada para actividades reñidas con la moral, no obstante no haberse producido la participación del magistrado, sino del personal bajo su cargo, ello denota por parte del doctor Alarcón del Portal el poco o casi nulo control que tenía sobre el personal que directamente trabajaba para él, situación que este Colegiado no puede pasar por alto, sobre todo si se tiene en cuenta que en aquella época detentaba el cargo de Presidente de una Corte Superior (la de Huánuco-Cerro de Pasco) y por ende la máxima autoridad en dicho Distrito Judicial cuya imagen se vio seriamente afectada.

iv) En cuanto al hecho de haber favorecido a un diario provinciano con designación como Diario Oficial de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, el magistrado señaló en su entrevista personal y en sus descargos presentados, que dicha designación fue un error de parte de su asesor legal, pues para hacer esa designación se seguía un proceso administrativo; sin embargo, dicha afirmación, no exime la responsabilidad del evaluado en esos hechos sobre todo si tenemos en cuenta que accedió al cargo de Presidente de dicha Corte Superior, según la propia afirmación del evaluado, en mérito a su amplia experiencia como Jefe del departamento legal de un banco, como gerente administrativo de la Beneficencia Pública de Lima y haber obtenido el primer puesto en un curso de gestión de personal, todo lo cual indica que debía tener el mínimo conocimiento que este tipo de adjudicaciones en el sector público se realizan mediante convocatorias públicas, lo cual refleja desconocimiento de las normas que regulan la materia, así como la inconsistencia de las afirmaciones vertidas por el evaluado, además se tiene en cuenta su actitud de pretender responsabilizar a terceros como el asesor legal, siendo ello una conducta carente de diligencia y cabal cumplimiento de las normas constitucionales y legales así como un ejercicio poco responsable del cargo.

v) En lo relativo a la expedición de la Resolución Administrativa N° 038-99-PCSJHP de 08 de marzo de 1999 designando al doctor Joel Jorge Echevarría Sánchez como Juez Suplente del Segundo Juzgado Penal de Huánuco en vía de regularización, a partir de 5 de enero de 1999, como Juez encargado de los remates de los objetos materia de delitos durante el año 1999, situación que ha sido acreditada y admitida por el doctor Alarcón del Portal quien además sostuvo que el año 1999 no se había efectuado ningún remate de objetos materia de delito, lo cual no lo exime de responsabilidad máxime si lo ha reconocido en su entrevista al expresar **"...mi falta la reconozco..."** aceptando su responsabilidad en estos hechos; además de ello en el presente caso, no se justifica la designación de un juez de remates, mediante una resolución administrativa, vía regularización tres meses después de supuestamente asumida la función, cuando no existía razón para ello, ya que como sostiene el propio magistrado, no se había presentado ningún remate que fuera de competencia del citado juez designado en lo que iba del citado año; dicho procedimiento irregular pudo generar además pretendidos derechos retroactivos y devengados en perjuicio del exiguo presupuesto judicial.

Los hechos descritos revelan que la gestión del doctor Alarcón del Portal, como Presidente de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, estuvo plagada de irregularidades por la reiterada inobservancia de las normas, así como una inadecuada conducta y falta de idoneidad, hechos que son apreciados por este Colegiado en su real magnitud;



Resolución del Consejo Nacional de la Magistratura

SEXTO: Que, en cuanto a la información del Colegio de Abogados de Lima corriente a fojas 474 del expediente, certificó que el magistrado no registraba medida disciplinaria vigente a la fecha de emisión del referido documento, asimismo no se registra su participación en los diferentes referéndums realizados por dicho gremio de abogados. Por otro lado el Colegio de Abogados de Huánuco informa que en el referéndum realizado el año 1998 obrante a fojas 3175, 3176, así como la información obrante a fojas 3179, 3180, 3193, 3194 y 3195, se advierte que en el rubro relacionado con su eficiencia obtuvo 29 votos favorables y 87 desfavorables; en cuanto al rubro idoneidad obtuvo 23 votos de opinión favorable y 89 desfavorables; en el rubro actúa con independencia obtuvo 16 votos favorables y 99 desfavorables; sobre si es sumiso al gobierno de turno 102 abogados opinaron porque sí y 15 por el no y finalmente en cuanto al rubro emite resoluciones de calidad obtuvo 24 votos favorables y 75 votos fueron desfavorables. Al respecto cabe precisar que si bien el magistrado en su entrevista personal, así como en la diversa documentación presentada a lo largo del proceso, manifiesta su inconformidad con dicho referéndum al cual cuestiona por haber sido mal calificado al igual que todos los magistrados de dicho Distrito Judicial a excepción de una magistrada que sería la única bien evaluada, este Consejo pondera los resultados de dichas consultas efectuadas por el citado Colegio Profesional y valora en forma conjunta con los diversos hechos y factores en los aspectos de idoneidad y conducta.

De otro lado durante el desarrollo del proceso se presentaron siete (07) denuncias de participación ciudadana las que han sido oportunamente absueltas por el magistrado evaluado; asimismo obran en el expediente diversas expresiones escritas de apoyo a la conducta y labor del magistrado las que han sido presentadas ante el Consejo por el propio magistrado evaluado, lo cual se pondera junto a los demás elementos de juicio anexadas al expediente.

SÉTIMO: Que, en lo referente al patrimonio del magistrado Alarcón del Portal, se aprecia de los documentos obrantes en el expediente, consistentes en sus declaraciones juradas, de la información de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, una situación patrimonial compatible con sus ingresos y obligaciones;

Rubro idoneidad:

OCTAVO: Que, en cuanto al aspecto idoneidad, dentro del rubro capacitación, se ha podido establecer que el doctor Alarcón del Portal dentro del período de evaluación, ha acreditado su participación en 01 evento académico como ponente, 02 certámenes como organizador y 24 eventos en la condición de participante; siendo el total de 27 eventos académicos en los que ha intervenido durante el periodo sujeto a evaluación, debiendo advertirse que durante los años 2001 y 2002 no ha participado en ninguna actividad académica. En la Academia de la Magistratura se ha acreditado su participación en 05 eventos de capacitación en los que no registra calificación según documentación obrante a fojas 1101 del expediente; denotándose que ha realizando el Noveno Curso de Preparación para el Ascenso, en el cual según la constancia presentada por el propio magistrado al presente proceso, registra calificaciones en su mayoría aprobatorias, sin embargo en el módulo de Derecho Constitucional y Procesal Constitucional ha obtenido la calificación de 11 (desaprobado). Al respecto sostuvo haber rendido un nuevo examen estando pendiente su calificación final, hechos que deben ser meritados por este colegiado con la debida ponderación. Por otro lado acredita haber egresado de la Maestría en Derecho Penal y del Doctorado en Derecho, en ambos casos dichos estudios fueron realizados en la Universidad Nacional Federico Villarreal evidenciándose que a la fecha no ha obtenido los grados correspondiente; también registra conocimientos básicos de informática y del idioma inglés.

NOVENO: Que, sobre su producción jurisdiccional se ha recibido información correspondiente al año 2000 (de enero a diciembre) donde registra 75 sentencias, 44 autos finales haciendo una producción total de 119 resoluciones, siendo que el evaluado indicó que dicha información no es real pues su producción en dicho año fue de 77 sentencias, 44 autos finales lo cual hace un total de 121 resoluciones encontrándose en el segundo lugar en dicho año; en el año 2001 (enero a mayo) registra 11 sentencias y 61 autos finales; en el año 2007 (noviembre y diciembre) registra 4 sentencias y 3 autos finales; en el año 2008 (enero a junio) registra una producción de 134 resoluciones entre autos y sentencias y el magistrado ha indicado que los meses de agosto a diciembre registra 26 sentencias y 62 ponencias mientras que en el periodo comprendido entre enero a abril del presente año registra una producción de 11 sentencias y 26 ponencias; asimismo existe información sobre la producción del año 2000 (enero a septiembre) registrando 67 resoluciones emitidas entre autos y sentencias. Cabe expresar que la información recibida no comprende todo el periodo materia de evaluación y de aquella recibida no se consigna cual fue la carga asignada específicamente al magistrado que permita establecer si cumplió a cabalidad con resolver los procesos que le correspondieron, por lo que en este aspecto este Colegiado toma con reservas la información recibida.

DÉCIMO: Que, respecto a la calidad de las decisiones emitidas por el magistrado, el especialista considera que de las 13 resoluciones presentadas ocho (08) han sido consideradas buenas y cinco (5) deficientes; al respecto el evaluado ha presentado sus observaciones, conforme se aprecia de fojas 2513 a 2527 del expediente.

En cuanto a las cinco (5) resoluciones deficientes, en una de ellas, fechada el 26 de diciembre de 1994 por el delito de estafa, no se aprecia una debida motivación del fallo, pues en uno de sus considerandos se sostiene de una parte que no se ha acreditado de ningún modo el cobro de un cheque por parte de un procesado, ni que éste haya sido autor del delito de falsificación de documentos, y de otro refiere que éste ha intentado hacer uso de ellos, llegando en grado de tentativa, habiendo hecho referencia al artículo 16° del Código Penal; sin embargo, en el fallo no se establece una condena en el grado de tentativa. Otra, de 02 de febrero de 1995, sobre delito de extorsión, al emitir su voto singular propuso una sanción de condena suspendida, habiendo admitido en su entrevista personal que *“estaban las pruebas...todo estaba probado...verdaderamente estaba extorsionando”*. Otra, de 20 de agosto de 1996, sobre delito contra la administración de justicia –evasión de presos en agravio del Estado, que declara extinguida por prescripción la acción penal, no fue bien estructurada ya que no se describen los hechos materia de investigación judicial, ni cada momento delictivo a fin de determinarse la fecha que pudiera ser considerada para evaluar la prescripción que se alegó en dicho proceso, habiendo indicado solamente la fecha en que se cometieron los hechos, desconociéndose las circunstancias correspondientes, lo que resultaba necesario para determinar el tiempo en que se cometieron. De otro lado, la resolución de 4 de abril del 2000, sobre delito contra la libertad -violación de la libertad sexual en agravio de menor-, se aprecia que no existe correspondencia entre la pena impuesta con los hechos descritos en la misma resolución, habiéndose justificado para ello que se ha considerado la versión exculpatoria del encausado, que se contradecía con el dicho de la agraviada y los exámenes médicos que se le practicaron. Al respecto en su entrevista personal, el magistrado manifestó que el criterio adoptado fue en principio en aplicación de la normatividad, que el procesado tenía 18 años por lo que procede rebajar la pena, además de ser confeso y arrepentido, y que por ser primario también se baja la pena, además de haber sido enamorado de la agraviada y de ser una persona que estaba estudiando, todo lo cual los llevó a aplicar la pena condicional; no obstante los argumentos expresados y contrastados con los hechos acreditados y descritos en la sentencia, resultaba evidente la violencia con la que se



Resolución del Consejo Nacional de la Magistratura

suscitaron los hechos, los que sucedieron hasta en dos oportunidades y que se trataba de una menor de 12 años, ante lo cual el magistrado culminó afirmando que la decisión fue en ejercicio de su criterio jurisdiccional, lo cual es tomado en cuenta por este colegiado en su real dimensión. Y finalmente otra, de 28 de enero de 2008, sobre delito de posesión de drogas, los actuados no han sido debidamente analizados por el magistrado al emitir su voto singular porque no ha sido confirmada por otra prueba que de solidez a su posición; es evidente entonces que el evaluado adolece de falta de idoneidad para resolver conforme lo exige la Constitución Política y la ley.

DÉCIMO PRIMERO: Que, consecuentemente, conforme a lo descrito y considerando los elementos que obran en el expediente de ratificación y en sus acompañados, ha quedado establecido que el doctor Carlos Alberto Alarcón del Portal durante el período sujeto a evaluación no ha satisfecho las exigencias de conducta e idoneidad acordes con la delicada función de impartir justicia, ya que ha sido objeto de tres sanciones disciplinarias, no ha observado una conducta e idoneidad adecuados durante el desempeño de su función al haber vulnerado los deberes prescritos en la Ley Orgánica del Poder Judicial que como Magistrado debe cumplir, en el caso de su desempeño como Presidente de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, como el de haber organizado una visita judicial con personal jurisdiccional y administrativo de tal forma que priorizó fines particulares y no institucionales en desmedro del erario público; haber realizado diversos cambios de magistrados poniendo en inestabilidad a ese Distrito Judicial en desmedro de lo establecido en la Ley Orgánica realizando cambios inclusive sin observar un procedimiento investigatorio previo basado sólo en subjetividades vulnerando derechos elementales de los magistrados, así como haber regularizado tardíamente la situación de un magistrado a cargo del remate de los bienes incautados en los procesos penales, vía la expedición de una resolución dictada con posterioridad a su actuación como juez; de otro lado, la descalificación del Colegio de Abogados de Huánuco en la evaluación del año 1998 reconocida por el propio magistrado en la entrevista pública; la deficiencia en la calidad de 5 resoluciones presentadas para su análisis en el presente proceso; y su reducida capacitación durante todo el periodo de evaluación, conducen a determinar que no debe continuar en el ejercicio de tan delicado cargo.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, este Consejo también tiene presente el examen de salud mental (psicométrico y psicológico) practicado en la persona del doctor Alarcón del Portal, que si bien resulta favorable al magistrado, por la naturaleza de la información, se mantiene en reserva;

DÉCIMO TERCERO: Que, por todo lo expuesto, tomando en cuenta únicamente aquellos elementos objetivos ya glosados para el proceso de evaluación y ratificación que nos ocupa, se ha determinado la convicción del Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura en el sentido de no renovar la confianza al magistrado evaluado.

En consecuencia, el Consejo Nacional de la Magistratura en cumplimiento de sus funciones constitucionales, de conformidad con el inciso 2 del artículo 154° de la Constitución Política del Perú, artículo 21° inciso b) y artículo 37° inciso b) de la Ley 26397, Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, y artículo 29° del Reglamento del Proceso de Evaluación y Ratificación de Jueces del Poder Judicial y Fiscales del Ministerio Público, aprobado por Resolución N° 1019-2005-CNM, y al acuerdo por unanimidad adoptado por el Pleno en sesión del 18 de mayo del presente año, con la abstención del señor Consejero doctor Edmundo Peláez Bardales;

SE RESUELVE:

PRIMERO: No renovar la confianza al doctor Carlos Alberto Alarcón del Portal y, en consecuencia, no ratificarlo en el cargo de Vocal de la Corte Superior de Justicia de Lima.

SEGUNDO: Notifíquese personalmente al magistrado no ratificado y, una vez que haya quedado firme la presente resolución, remítase copia certificada al señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República, de conformidad con el artículo trigésimo segundo del Reglamento del Proceso de Evaluación y Ratificación de jueces del Poder Judicial y fiscales del Ministerio Público, así como a la Oficina de Registro de Jueces y Fiscales del Consejo Nacional de la Magistratura para los fines consiguientes.

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.



CARLOS ARTURO MANSILLA GARDELLA



EDWIN VEGAS GALLO



FRANCISCO DELGADO DE LA FLOR B.



ANIBAL TORRES VASQUEZ



EFRAÍN ANAYA CARDENAS



MAXIMILIANO CARDENAS DÍAZ